

LA EMBESTIDA CONSERVADORA CONTRA EL DERECHO SOCIAL A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

THE CONSERVATIVE ONSLAUGHT AGAINST THE SOCIAL RIGHT FOR A PUBLIC EDUCATION

Telésforo Nava Vázquez¹

¹Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, email: telenava@yahoo.com.mx

Resumen:

La ofensiva contra la educación pública forma parte del cambio de época que la reforma conservadora, desde 1983, ha impuesto en nuestro país, con el objetivo estratégico de cambiar las relaciones sociales entre el capital y el trabajo, para lo cual ha desmantelado los contratos colectivos de trabajo y, sobre todo, reduce y privatiza los derechos sociales plasmados en la Constitución de 1917.

Palabras clave: cambio de época, reforma conservadora, privatización.

Abstract:

The offensive against public education is part of the changing times that the conservative reform has imposed on our country since 1983, with the strategic objective of changing social relations between capital and labor, for which it has dismantled collective labor contracts and, above all, reduces and privatizes social rights embodied in the 1917 Constitution.

Key words: epochal change , conservative reform , privatization,

Recepción 5 de abril

Aceptación 10 de abril

Como citar: Nava, T. (2017) “La embestida conservadora contra el derecho social a la educación pública”. *Voces de la Educación*. 2 (2) pp. 77-86.

LA EMBESTIDA CONSERVADORA CONTRA EL DERECHO SOCIAL A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

La ofensiva de la política estatal y de las cúpulas empresariales (como Mexicanos Primero) contra la educación pública forma parte de la arremetida que el gran capital inició desde 1983 contra las conquistas que los asalariados, con sus luchas y movilizaciones, habían obtenido en las décadas anteriores, las cuales fueron codificadas en los contratos colectivos de trabajo, en la Ley Federal del Trabajo, y poco antes en los derechos sociales que los constituyentes de Querétaro plasmaron en la Carta Magna de 1917. De esa forma la política conservadora se abocó a sepultar la época del Estado Social, la era keynesiana, que el capital mundial se vio obligado a aceptar para superar las crisis económica, política y social que empezó a enfrentar desde ya avanzada la primera década del siglo XX, y, sobre todo, el ascenso social que cristalizó en las insurrecciones revolucionarias que estremecieron no solo a Europa sino al mundo entero en las segunda y tercera décadas de dicho siglo.

De manera más precisa, la guerra de clases que el capital abrió contra la clase trabajadora (Warren Buffett dixit: “por supuesto hay una lucha de clases, y la estamos ganando”) ha tenido como objetivo estratégico cambiar radicalmente las relaciones sociales entre el capital y el trabajo, lo cual hay que admitir que hasta el momento lo ha logrado. La lista de archimillonarios que Forbes regularmente publica, así nos lo constata, al igual que los indicadores de pobreza y desigualdad que en cada país se conocen. El retorno de epidemias y enfermedades que la ciencia médica había desterrado hace ya casi un siglo, es una muestra del debilitamiento del cuerpo humano debido a la cada vez menor nutrición, producto de la pauperización generada por los escasos y deprimidos salarios, reflejo de la desvalorización que se ha impuesto a la fuerza de trabajo.

Nueva época capitalista

Lo que se ha estado diseñando es una nueva época del capitalismo, a la que popularmente se le denomina neoliberalismo, para lo cual sus autores además de abjurar de la era del Estado de Bienestar Social que el mismo capital creó, han presentado como panacea al más rampante liberalismo sustentado en las rígidas leyes del mercado que, a través de las cuales, supuestamente se auto regularía, como siglos antes lo aseguraba Adam Smith. Pero lo que estamos presenciado es una nueva acumulación de capital cimentada esencialmente en la privatización y saqueo, con una gran violencia estatal, de bienes y servicios públicos, como son: el suelo y el subsuelo, las costas, ríos y lagunas, minas, energéticos, puertos y aeropuertos, carreteras y vías urbanas, transportes, banca y servicios financieros, complejos siderúrgicos, sistemas de salud, sistemas de seguridad social y fondos de pensiones de los trabajadores, sistemas de agua, medios de comunicación y telecomunicaciones: Desde luego el desmantelamiento y privatización de la educación pública, que está llevando a redefinir los fines de la investigación científica, del trabajo intelectual y de la generación y transmisión del conocimiento.

Margaret Thatcher y Ronald Reagan fueron los heraldos que anunciaron, con toda la violencia que consideraron necesaria (los mineros británicos y los controladores aéreos norteamericanos así lo constataron), el inicio de la nueva era. Para el caso de México, Miguel de la Madrid dio el banderazo de arranque de la carrera que, según promesas, el futuro de los mexicanos sería de

prosperidad, y Carlos Salinas se comprometió a llevar a México al Primer Mundo, y cada nuevo gobierno, sea priista o panista, promete algo similar. También fue la violencia estatal el argumento más esgrimido contra los trabajadores mexicanos afectados: Fundidora Monterrey, Dina, Renault, Concarril, Altos Hornos de México, Aceros Ecatepec, Ford Cuautitlán, Volkswagen, Cervecería Modelo, en fin la lista es extensa. Desde luego el SNTE, en específico la CNTE. Despidos, compactación de Contratos Colectivos de Trabajo, cierre de empresas, reducción de salarios, uso de la fuerza represiva como argumento convincente para los asalariados insumisos que no aceptaban los nuevos designios del capital.

El desmantelamiento de los contratos colectivos de trabajo tuvo como objetivo estratégico sacar de ellos los beneficios que los trabajadores obtuvieron en décadas anteriores. El charrismo sindical fue clave para operar e imponer la nueva estrategia conservadora; en la educación lo vimos con el SNTE dirigido por Jonguitud Barrios, luego por Elba Esther Gordillo, y ahora por un anodino que difícilmente alguien recuerda su nombre. Pero, en esencia, igual papel cumplieron algunos dirigentes de sindicatos independientes, quienes rápidamente se sumaron al coro liberal conservador, como el líder del sindicato de Telmex, consentido de Carlos Salinas y pieza clave para la privatización de dicha empresa pública. En la educación superior ha sido emblemática la función de la dirigencia del STUNAM, cuyo primer secretario general, Evaristo Pérez Arreola, fue premiado con el nombramiento de asesor del Presidente Carlos Salinas.

Salarios y prestaciones medianamente dignas, así como el derecho a una pensión al final de la vida laboral, han sido violentamente atacados como privilegios por parte de empresarios y funcionarios gubernamentales con fuertes campañas en los medios de comunicación, Los autores principales de esa acometida son nada menos que los más privilegiados por las políticas gubernamentales y la privatización (saqueo de la riqueza social) a precio de regalo de las más de mil empresas estatales, lo que les aseguró aparecer en las listas de Forbes, como es el caso de Claudio X. González. Por esa vía, que el marxismo denomina acumulación por saqueo, se logró que en el país hoy se localicen algunos de los más ricos del planeta, pero esa “distinción” costó hundir en la pobreza a más de la mitad de los mexicanos. Vaya privilegios. Empero, esas campañas cumplen su cometido, porque hacen que otros trabajadores en lugar de exigir las mismas condiciones para todos los asalariados, asuman un complejo de culpa y crean que en efecto son privilegios.

Un eje de la embestida contra los asalariados ha sido erosionar lo más posible la solidaridad social, tanto en el centro de trabajo como en el conjunto de la sociedad, lo cual ha pasado por el debilitamiento de las organizaciones sindicales y populares. No más contratos colectivos de trabajo que amparen a todos los agremiados, con condiciones laborales similares y protejan su seguridad y salud en el proceso de trabajo. La flexibilidad del trabajo y los salarios ha extendido el individualismo premiado por estímulos a la productividad, y asegurado a la empresa disponer del trabajador según le convenga, sin ninguna cortapisa. Que cada trabajador individualmente busque mejorar sus ingresos y condiciones de trabajo. O que mejor para los empresarios que la subcontratación vía las empresas outsourcing, lo cual los libra de responsabilidades laborales.

Flexibilización del trabajo educativo y clientelismo sindical

A esa política también se integró al sector educativo. La carrera magisterial fue creada en esa perspectiva, de introducir a los profesores de la educación básica en la dinámica de las gratificaciones a cambio del esfuerzo individual, que cada quien recolecte una especie de pilones

que les son cambiados por mayor salario, pero también los vuelve más frágiles ante el clientelismo charro. Esa política resultó esencial para consolidar el cacicazgo de Elba Esther Gordillo, quien consiguió que el gobierno federal aprobara el presupuesto necesario para realizar esas y otras concesiones económicas, y de esa forma contar con las condiciones para controlar al SNTE ante la briosa resistencia de los profesores organizados en la CNTE, la cual, a pesar de las maniobras de la dirigencia sindical para controlar los congresos e imponer en las elecciones internas a sus incondicionales, logró extender y consolidar su fuerza en el sindicato.

Con un SNTE sometido por una dirección por demás corrupta, que ha sido y sigue siendo parte importante del sistema político mexicano, resulta evidente que la carrera magisterial ha estado signada por acciones donde los dirigentes venden los ascensos. Hoy que los profesores de la educación básica sufren una feroz acometida de las cúpulas política y empresarial, a sus detractores se les olvida que aquellos han sido víctimas del sistema político priista que los ha usado clientelar y corporativamente, y que sus defectos están relacionados directamente por las distorsiones que desde el poder les impusieron, como los dirigentes que han sido la correa de transmisión y sujeción de las políticas estatales. Que asimismo Elba Esther hizo y deshizo como quiso debido al apoyo otorgado desde el poder presidencial, a cambio de mantener sometido al SNTE.

Es pertinente tener presente que la educación básica es clave para una formación sólida de los estudiantes que más tarde optan por continuar sus estudios en los niveles superiores, pero si en ella no se presta la atención debida, primero a la formación y actualización de los profesores que son quienes transmiten el conocimiento a los niños, así como que sus ingresos sean suficientes para permitirles tener una vida familiar digna, sin privaciones y sin la necesidad de andar en labores extras para complementar el ingreso; que dichos profesores no estén subordinados a la manipulación de los charros sindicales a quienes lo que menos les interesa es la educación de la niñez mexicana, porque su objetivo es y ha sido su carrera política y enriquecimiento a toda costa; que cuenten con aulas dignas, con el material didáctico necesario, acorde con las nuevas tecnologías; y se asegure de menos un alimento a los niños en la escuela, porque la mayoría de ellos llega con el estómago vacío al aula; resulta evidente que de no disponer de esas condiciones materiales para su educación, se está construyendo el fracaso de los estudiantes de la educación superior, porque no fueron preparados para los futuros retos educativos. Desde luego el discurso oficial y empresarial toda la culpa la hace recaer en los profesores, lo cual los menos que puede decirse que se trata de una visión maniquea.

Flexibilización y trabajo a destajo en la educación superior

Para la educación superior la década de los años ochenta del siglo pasado resultó devastadora, el salario académico registró una caída vertical que también obligó a los profesores a dobletear jornadas laborales, del mismo modo el presupuesto público dedicado a ella se vio reducido, lo que afectó tanto a la docencia como a la investigación. Frente a esa realidad, desde 1989-1990 aparecieron los programas de becas y estímulos, a través de los cuáles se ha fomentado el individualismo y los ingresos irregulares vía el trabajo a destajo (flexibilidad del trabajo), el que se cuantifica en puntos por conferencia o ponencia, artículo de divulgación, artículo científico, libro de diversas características, organización de coloquios o congresos, reporte de investigación, horas clase impartidas en licenciatura o posgrado, elaboración de apuntes para la docencia, producción de programas o planes de estudio, asesoría de tesis o trabajos terminales de diversos niveles, ocupar

cargos de coordinación o dirección, representación ante los órganos colegiados que existan en la institución, grados académicos. La lista de actividades para comprobar la productividad es larga.

Pero esos programas para el trabajo a destajo no fue obra de la creatividad de las autoridades educativas mexicanas, porque es en 1988 cuando el FMI publicó las políticas que incluyen las compensaciones basadas en el mérito individual para fomentar la competitividad de los académicos. La SEP y la ANUIES lo que hicieron fue adecuar los nuevos dictados del organismo mundial e imponerlos en las instituciones de educación superior, tal como lo siguen haciendo con los ukases remitidos por la OCDE.

Las gratificaciones que otorga el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) también fueron una respuesta salarial a la severa caída de los ingresos del mundo académico en los años 80, como se anotó anteriormente, la cual estaba provocando la migración de académicos a instituciones del extranjero o a otras actividades y amenazaba con deteriorar seriamente las tareas universitarias, como son la investigación, docencia y difusión de la cultura. Pero de ser simples medidas salariales, después se les ha cubierto con una aureola elitista, para profundizar el individualismo y una especie de falsa división social en el mundo académico, obviamente sobra quienes se creen esa leyenda.

A falta de títulos nobiliarios están los niveles del SNI, o ya de menos el perfil Promep. Así surge la supuesta casta que debraya en el Olimpo con Platón, Hegel, Newton, Maquiavelo, Lavoisier, Galileo o Einstein, y por otro lado se encuentran los simples mortales, pero la necesidad, que dice la sabiduría popular tiene cara de hereje, los une en la tarea de andar persiguiendo los puntos que cambiarán por pesos. Esa realidad es la que produce a los Fausto Alzati, personaje engreído, digno integrante de la picaresca política, quien dirigió el Conacyt sin tener licenciatura, aunque ostentaba doctorado de Harvard, y se solazaba humillando a quien no tuviera título de doctor. Cuando Ernesto Zedillo lo nombró Secretario de Educación Pública fue exhibido como un farsante, simplemente era un bachiller fraudulento.

Para el mundo académico universitario por la vía de las becas y estímulos le llegó la flexibilización del trabajo expresada en labores a destajo, a cada académico se le da el derecho de optar por un ingreso extra, además del salario nominal (regularmente el primero es superior a éste), cuyo monto se define a partir de lo que demuestre de productividad. De esa forma en el medio universitario desde hace 26 años se aplica unilateralmente la evaluación de los profesores e investigadores, ésta primero fue anual, posteriormente se abrió a rangos más amplios. Para complementar ese plan se crearon los círculos de calidad: áreas de investigación, y después, por dictado de la SEP-Promep, los Cuerpos Académicos. Sin embargo, a los creadores de tan “novedoso proyecto”, similar al que se imponía en el mundo empresarial, se les olvidó u omitieron, que periódicamente también debían evaluarse dichos programas de salario informal para determinar si se cumplían las metas y expectativas prometidas, para hacer los ajustes pertinentes, e incluso cambios radicales si era necesario, y desde luego también evaluar a los evaluadores.

Ilegalmente las autoridades universitarias determinaron que el ingreso extraordinario por becas y estímulo no es salario, cuando la Ley Federal del Trabajo dice exactamente lo contrario en su artículo 84. Con esa retorcida a la ley laboral se decidió que esos ingresos informales no estarían sujetos a relaciones bilaterales entre patrón y empleado, por lo tanto los sindicatos no pueden intervenir para nada en su negociación. Todo queda en manos de las autoridades universitarias, como es si la beca o estímulo se mantiene o desaparece, si se conserva el mismo monto otorgado o se reduce, como ha sucedido. Asimismo los funcionarios académicos se convierten de facto en autoridad laboral, ellos otorgan las condiciones para asistir a congresos fuera de la ciudad, el acceso

a las publicaciones que dependen de la institución, presupuesto para la investigación, otorgamiento de comprobantes de haber cumplido determinadas funciones, en fin. Además dicho ingreso extra no es considerado para prestaciones como prima vacacional, prima por antigüedad, aguinaldo o jubilación. El grado de discrecionalidad varía de institución a institución. En el mismo Conacyt se exhibió que algunos de sus funcionarios que no hacían vida académica eran miembros del SNI. O altas autoridades universitarias que exhiben una gran producción de investigación, como si su día fuera de 48 o 72 horas.

Con esos programas lo que se ha conseguido es pervertir la vida académica, obligando a que los profesores se dediquen a producir, como sea, lo que da más puntos, desatendiendo actividades menos lucrativas pero también sustantivas. Como las evaluaciones privilegian la productividad individual, han llevado a la desintegración de equipos de trabajo, imponiéndose el más puro individualismo con todas sus consecuencias. Así como los funcionarios académicos, también las comisiones dictaminadoras se han tornado en poderosas autoridades laborales. Desde luego para los funcionarios universitarios también es importante, para su carrera política, mostrar que su institución es muy productiva, que sus académicos son la crema y nata, que se demuestra en una producción elevada. La simulación campea por todos lados.

Elitización, antidemocracia y mayor control burocrático en las IES

A la par de esos programas de becas y estímulos, la política estatal ejecutada por las autoridades universitarias también ha avanzado en asegurar un mayor control burocrático sobre las mismas; como lo es reducir a un papel ornamental los órganos colegiados, simulando en ellos una vida democrática, porque en la realidad las autoridades en turno regularmente imponen sus decisiones. En dichos órganos aparte de los funcionarios, quienes por antonomasia forman parte de los mismos, también participan representaciones de estudiantes y profesores, supuestamente electos democráticamente, pero que pocos estudiantes y profesores participan en las votaciones. Los rectores son nombrados por una muy reducida junta de notables, misma que en acciones tipo endogámicas sus integrantes son electos por los poderes fácticos de la institución. La misma falta de democracia impera en el nombramiento de otros funcionarios, como directores. En los hechos la comunidad universitaria está excluida de esos procesos.

De igual forma, en tanto la demanda de mano de obra calificada en el mercado laboral se ha restringido, en los centros de educación superior públicos se reduce cada vez más su formación. En esa perspectiva se ha aminorado la matrícula en el bachillerato y las licenciaturas (los turnos en el Colegio de Ciencias y Humanidades fueron reducidos), los exámenes de selección se encargan de regular-limitar el ingreso de nuevos estudiantes, el número de estudiantes aceptados en las licenciaturas cada vez es menor, y mayor resulta el número de rechazados; asimismo se han encarecido las cuotas y servicios (esto poco lo han logrado en la UNAM, IPN y UAM que se localizan en la ciudad de México, pero sí ha avanzado en las instituciones ubicadas en otras entidades federativas). La escasez de recursos, como libros en las bibliotecas, laboratorios adecuados, salas de cómputo suficientes, horarios de clases ad hoc para los estudiantes que trabajan, comedores con horarios y precios accesibles, son algunos de los valladares con los que igualmente se obstaculiza el desarrollo y egreso de los nuevos profesionistas, e impactan principalmente a quienes proceden de los sectores populares. Casualmente es en esta época que han proliferado las escuelas y universidades privadas de todo tipo, asimismo el Conacyt ahora otorga financiamiento a las universidades privadas.

En ese tenor, en el Tratado de Libre Comercio se ubica a la educación como un campo de la inversión privada nacional y extranjera; por ejemplo, en el Capítulo X se especifica la obligación de que todas las compras gubernamentales incluyendo las educativas, queden sujetas a licitación internacional; igualmente en el Capítulo XV se especifican limitaciones a las actividades del Estado en la educación. Por esa vía la educación, especialmente la superior, se torna funcional y subordinada a la empresa privada. Asimismo, bajo el discurso de relacionar la universidad con el sector productivo, se ha impuesto que la investigación científica responda a los requerimientos de las grandes empresas, sin mayor costo para las mismas. Se trata de otra expresión de la privatización de la universidad pública, tal cual está planteado en la reestructuración conservadora.

Reforma conservadora en la educación superior.

El primer gran intento de reforma conservadora a la educación superior lo ensayó el Rector Jorge Carpizo en la UNAM. Con el análisis y propuestas presentadas en 1986 al Consejo Universitario en el documento *Fortaleza y Debilidad de la UNAM* (documento que no era más que la ejecución del *Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior* que estaba en proceso de ser formalmente aprobado por la ANUIES ese mismo año, aunque de la SEP ya tenía el visto bueno que acataba las orientaciones que sobre la materia había dictado el Fondo Monetario Internacional), e imponiendo su aprobación sin cumplir con los requisitos institucionales para hacerlo. En términos llanos lo hizo con un albazo, en la más pura tradición priista. No obstante ese golpe de mano, finalmente fue abortado por la batalla protagonizada por el movimiento estudiantil organizado en el Consejo Estudiantil Universitario (primer movimiento de masas que confrontó a la embestida conservadora que recorría el país), el que después de una huelga obligó a las autoridades a la realización de un Congreso Universitario, para que en él la comunidad universitaria discutiera el destino de la institución.

La administración encabezada por Carpizo, con todo el apoyo del aparato estatal, hizo hasta lo indecible para frenar o, de menos, neutralizar la respuesta estudiantil, como fue posponer lo más posible la realización del Congreso Universitario buscando el enfriamiento y desmovilización de los estudiantes. Contra esa reforma conservadora a la educación superior que se aplicaba a nivel mundial, el movimiento estudiantil se levantó no sólo en México, lo mismo sucedió en Francia, España e Italia.

La pretensión de la política del rector Carpizo era acentuar la elitización de la institución y encaminarla hacia la transformación conservadora que se imponía en el país. Para empezar se proponía limitar el acceso de los jóvenes a la universidad, argumentando supuestos malos resultados de los estudiantes, pero eso coincidía con: la reducción del presupuesto a las Instituciones de Educación Superior Pública (José Garandilla calcula que la caída del subsidio federal a la educación superior se refleja en el hecho que en 1977 el gasto por alumno era de 20,560 y para el 2000 se redujo a 13,972, a pesos constantes); la imposición de la lógica de la modernidad conservadora que prioriza y alaba lo privado sobre lo público, lo individual sobre lo colectivo, el ascenso social a través de la descarnada competencia individual de todos contra todos, y anatemiza la solidaridad social.

Todo esto en el contexto de una severa caída en el empleo y los salarios (en 1976, año en que la curva salarial alcanzó su punto más alto, los salarios representaban el 40.3% del PIB, diez años después esa cifra se redujo al 26%), que repercute de inmediato en la deterioro de las condiciones

materiales de los estudiantes, lo que obliga a muchos de ellos a buscar algún tipo de trabajo, que inevitablemente les mengua el tiempo para los estudios, otros de plano tienen que abandonar el estudio.

Como se ha anotado más atrás, la política estatal desde fines de 1982 tiene como objetivo central dismantlar los derechos sociales, como es la educación, y, por lo tanto, a una mayor privatización de la misma, aunque se diga lo contrario. Derecho social que desde las cúpulas del poder ha sido víctima, al igual que todo lo público, de una permanente denigración. Antaño la clase política priista enviaba a sus hijos a estudiar a las escuelas públicas, sus licenciaturas las cursaban en la UNAM, especialmente en la Facultad de Derecho, después en la de economía. La embestida conservadora ha hecho que la nueva élite política prefiera las escuelas privadas y menosprecie las públicas. Hoy el alma mater de priistas y panistas es el ITAM, el Tec, Lasalle, las escuelas de los Legionarios de Cristo. En los últimos gabinetes presidenciales la batuta la llevan los egresados de esas instituciones.

Ciertamente de manera formal los gobernantes y sus voceros oficiales y oficiosos niegan estar privatizando la educación pública. Misma posición han mantenido en cuanto a Pemex, sin embargo la actividad petrolera paulatinamente ha sido penetrada por la inversión privada, y finalmente en 2013 impusieron la reforma constitucional a través de la cual se privatizan los hidrocarburos, desbrozando así el camino para finalmente privatizar Pemex, tarea en la cual les ayuda la crisis petrolera que se vive.

En 1999 el Rector Francisco Barnés hizo un nuevo intento por imponer todo el paquete de la reforma conservadora en la UNAM, pero de nueva cuenta el movimiento estudiantil, ahora organizado en el Consejo General de Huelga, después de una larga huelga y de la entrada de la policía federal al campus universitario para acabar con el movimiento, así como de la renuncia del Rector Barnés, impidió la intentona, de lo cual las autoridades comprendieron que la transformación tenían que aplicarla de manera silenciosa y a un ritmo más lento del que la querían hacer.

En ese tenor, lo que no pudieron meter por la puerta, paulatinamente lo han ido introduciendo por las ventanas. Ironías de la historia, el rector Ramón de la Fuente que de facto llegó a la Rectoría con la policía federal por delante; así como el rector José Narro, Secretario General de la UNAM en el rectorado de Jorge Carpizo (encabezó la comisión de las autoridades en el diálogo público con el CEU y personaje central en la tarea de sabotear el Congreso Universitario y las transformaciones que proponían los estudiantes), ambos rectores con el apoyo estatal lograron tener bajo control a la comunidad universitaria a la par que se construyeron un perfil pseudo progresista, lo cual les facilitó encabezar la transformación silenciosa de la UNAM.

Embestida y resistencia en la educación básica

Con esa relativa calma en las IES, la política estatal enfoca sus baterías a la educación básica con el fin de retomar el control subordinado de los profesores, para lo cual hicieron una reforma educativa cuyo eje central no es la educación, sino una reforma laboral cuya pretensión es dismantlar a la CNTE, someter a los profesores y pasar directamente el poder a la Secretaría de Educación Pública, dado el interregno que vive el SNTE. La Espada de Damocles que se utiliza es la evaluación a modo para infundir pánico entre los profesores, con el fin de que acaten el nuevo mando. Pero aparte de la resistencia que esa política está enfrentando de parte de los profesores, el

gobierno no tiene en el SNTE una burocracia sindical con la capacidad política para imponer los designios estatales, como lo hizo con Elba Esther Gordillo; tampoco al frente de la SEP hay un político con experiencia en la estrategia educativa, ni mucho menos con carisma y habilidad política para sacar adelante la tarea que le han asignado, por lo que el titular de la SEP trata de subsanar sus deficiencias con acciones populachera.

Sin embargo hay que anotar que algunas prácticas de secciones de la CNTE le “hacen el caldo gordo” a esa embestida, como es que los profesores dejen a los niños por largos periodos sin clases y no se las repongan después, lo que crea un gran malestar en los padres de familia y lleva a perder el apoyo de ellos. Igual reacción hay con medidas que recurrentemente afectan a terceros, especialmente de sectores populares, incluso en actividades que les reportan el ingreso con el que viven.

Empero, la realidad se les está complicando a los reformadores conservadores debido a la severa crisis que enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien llegó a la presidencia con el lema de que ellos, los priistas, si sabían cómo hacerlo. Pero lo que han hecho es profundizar la crisis que azota al país, empeorado la situación económica y provocando un mayor malestar social. El Pacto por México fue una *llamarada de petate* que rápidamente se convirtió en humo, demostrando con ello que no tienen ni idea de cómo sacar adelante al país.

Paralelamente se están desarrollando movimientos bajo formas autónomas de organización, los cuales desde su nacimiento toman distancia de los partidos políticos y desde luego del gobierno. Movimientos que aún no logran coordinar sus fuerzas y luchas, lo que facilita que algunos de ellos finalmente el gobierno los neutralice e incluso los diluya. Entre ellos ha destacado la lucha encabezada por el EZLN, así como el movimiento indígena en Cherán, Michoacán, en defensa de sus bosques; la batalla de la APPO en Oaxaca; el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, levantado por el poeta Javier Sicilia; la movilización de los campesinos de La Parota, Guerrero, para proteger sus tierras ante la amenaza de la construcción de una presa; la legendaria batalla de los pobladores de San Salvador Atenco, Estado de México; la rebelión de los indígenas Huicholes por preservar sus lugares sagrados; diversos movimientos contra la salvaje explotación minera desarrollada por el capital, principalmente extranjero; y desde luego las luchas de trabajadores mineros por sus condiciones de trabajo; la formación de las autodefensas en diferentes partes del país; el movimiento encabezado por los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. En efecto, la realidad cada día es más complicada para el gobierno y los señores del capital, las fanfarrias con que iniciaron sus reformas conservadoras, hoy ya están afónicas.

***Telesforo Nava Vázquez**

Maestro investigador en el Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I)

Sus líneas de investigación son: Formación y desarrollo del régimen político en la Ciudad de México. Estado y conflictos sociales en la ciudad de México

Especialista en los temas: Estado y sistema Político mexicano y Gobierno y movimientos sociales en la Ciudad de México.